



# Asamblea General

Distr. general  
31 de agosto de 2017

Español únicamente

---

## Consejo de Derechos Humanos

36° período de sesiones

11 a 29 de septiembre de 2017

Tema 4 de la agenda

**Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo**

### **Exposición escrita\* presentada por la American Association of Jurists, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva especial**

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

[18 de agosto de 2017]

---

\* Se distribuye esta exposición escrita sin editar, en el/los idioma(s) tal como ha sido recibida de la(s) organización(es) no gubernamental(es).



## **Argentina: violaciones graves de los derechos del pueblo Mapuche**

La Asociación Americana de Juristas<sup>1</sup> llama la atención del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el agravamiento de la violación de los derechos de los Pueblos Indígenas (PPII) en Argentina.

### **El derecho a habitat y territorio**

En particular, la falta de regularización dominial de las tierras-territorios indígenas, la vulneración del derecho a la consulta previa frente a proyectos de corte extractivista, la criminalización de la protesta indígena, las privaciones arbitrarias de libertad a sus integrantes y la utilización del aparato policial y judicial estatal para reprimir las legítimas demandas de los pueblos originarios.

Los avances Constitucionales y legales no se tradujeron en políticas ni prácticas que reparen la traumática relación histórica entre el Estado argentino y los PPII. La falta de solución a los conflictos territoriales indígenas que abarcan gran parte de la geografía argentina, se agudizó con la criminalización y encarcelamiento de líderes en procesos de doble persecución penal.

Frente a la protesta, el Secretario de Seguridad de la Nación encabezó una represión con la Gendarmería Nacional, sin orden judicial, con balas de goma y de plomo en Leleque, provincia del Chubut, donde el Pu Lof en Resistencia reclama tierras concedidas por el estado a la CTSA en poder del Holding Benetton.

La desmedida represión culminó con la desaparición forzada de Santiago Maldonado el 1º de agosto de 2017 que a la fecha sigue sin aparecer. Los rastros en vehículos de la Gendarmería fueron lavados y los precintos rotos. La política de persecución y hostigamiento también se produce en Formosa donde sigue encarcelado el líder Agustín Santillán, desde el 14 de abril de 2017, por demandar por el cumplimiento de sus derechos, en particular asistencia médica para las comunidades de la región y ayuda por una sucesión de inundaciones. En ocasión de su detención se encontraba en la Comunidad Del Barrio Obrero en una reunión en la que se planteaban acciones frente al flagelo de las drogas en las comunidades.

Las denuncias del Genocidio estatal y despojos territoriales masivos contra el Pueblo Mapuche no han sido respondidas por el Poder Ejecutivo Nacional.

La ley 26.160, del año 2006, declaró la emergencia de la POSESIÓN Y PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA<sup>2</sup> y prohibió los desalojos a comunidades indígenas. La ley ordena relevar los territorios indígenas. Pasados 10 años, menos del 30% de los territorios fueron relevados. El Relator Anaya verificó en 2011 numerosos desalojos, incluso violentos, a Comunidades de todo el país. La ley no se cumplió y vence en noviembre de 2017. El estado demora su prórroga y no destina presupuesto ni recursos para su implementación.

El Presidente Macri al asumir prometió mejorar la relación con los pueblos indígenas. Pero, las instituciones indígenas fueron vaciadas; programas desfinanciados. Los funcionarios han sido designados sin consulta ni participación y carecen de especialización en derecho indígena.

En la Provincia de Misiones el 8 de julio de 2017, funcionarios del municipio de San Ignacio despojaron a la Comunidad Guaraní “Tekoa Kokuere’i” de su ocupación tradicional del lote 23 del Paraje Montecito, destruyendo e incendiando 5 viviendas, desplazando a 30 indígenas -entre ellas 10 niños, 3 mujeres, 1 anciana-, con amenazas de muerte con machetes y motosierras, en vehículo oficial, cortaron suministros de luz y agua.

### **Derecho a la salud**

*El lawen* es la medicina ancestral elaborado por *Machi* autoridad espiritual del pueblo mapuche-tehuelche, PPII preexistente constitucionalmente reconocido<sup>3</sup>. El tránsito transfronterizo está protegido por los arts. 32 del Convenio

---

<sup>1</sup> Esta contribución se benefició de la asistencia Asociación de Abogados/as de Derecho indígena (AADI) - Argentina

<sup>2</sup> Constitucionalmente reconocidas en 1994

<sup>3</sup> art 75, inc 17

169 OIT, 34 de la UNDRIP, pues los Mapuche habitaban la Región Patagónica antes de la colonización. El Mapuche se autorreconoce como Pueblo indígena (art. 1 Convenio 169 OIT), con un solo territorio (*Wallmapu*) dividido por 2 estados nacionales. En los últimos meses, el Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria (SENASA) vienen obstaculizando el libre tránsito de *lawen* entre *Ngulumapu* (actualmente República de Chile) y *Puelmapu* (actualmente República Argentina) con serio riesgo para la salud de personas (mapuche y no mapuche) que dependen de esta medicina utilizada para tratar afecciones graves y crónicas de salud relacionadas con aspectos físicos y espirituales.

La destrucción arbitraria de medicina constituye una violación de las obligaciones internacionales del estado mencionadas, en relación con el derecho a la salud (art. 11 PIDESC) de los Mapuche, a la vez lesionan el principio a la libre determinación de los pueblos originarios por la discriminación en el ejercicio del derecho a la salud y la cultura. Es preocupante el trato “diferencial” a los mapuche-tehuelche en especial en el “Paso Internacional Cardenal Samoré”<sup>4</sup>. Son múltiples los testimonios de víctimas de este tipo de atropellos, los/las machis que soportan reiteradamente estos abusos de las autoridades. Se ha intimado al estado a instruir a las autoridades intervinientes con denuncia de los atropellos discriminatorios ante el INADI, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía Federal en materia de Violencia Institucional.

En Misiones, una ONG y 6 guarda parques vienen obstaculizando desde 2014 la construcción de un camino indígena en Lote 8 del Parque Moconá para dar acceso a centros de salud y hospital a 3 comunidades selváticas Mbya Guaraní, Tekoa Yma, Kapi'i Yvate e Ita-O-Miri. El gobierno de Misiones autorizó el camino por Resolución 200/2017, con uso exclusivo de las comunidades, equipos de salud y guardaparques con participación de las comunidades Mbya Guaraní, que atraviesa su propio territorio y menos de 3 kilómetros del Parque Provincial Moconá, conservando la salud de los Mbya Guaraní, sus derechos y la biodiversidad selvática. Una demanda suspendió la apertura del camino privando a las Comunidades del derecho a acceder al tratamiento de enfermedades curables.

### **El saqueo de los recursos naturales**

El estado nacional y las provincias extraen recursos de los territorios indígenas sin su consentimiento, consulta ni participación a pesar de estar constitucionalmente protegido el derecho a participar en la gestión y obtener beneficios de esos recursos. No hay ley, protocolo ni prácticas de respeto a las disposiciones del art. 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT ni de las disposiciones de la UNDRIP.

### **Acceso a la Justicia**

Hay obstáculos procesales, culturales, económicos y profesionales. Los pueblos indígenas y sus miembros, cuando atraviesan por procesos judiciales se encuentran en una clara situación de desventaja y vulnerabilidad:

- En general para acceder a la justicia deben realizar largas caminatas de varios días inclusive para llegar a la ciudad más cercana a denunciar los hechos de violencia sufridos, lo que genera además dificultades de índole probatoria.
- Barreras culturales: no son tenidas en cuenta en el sistema oficial de administración de justicia las particularidades de los pueblos indígenas, mucho menos considerados los sistemas de administración de justicia comunitaria.
- El idioma impide o dificulta el acceso a las instancias judiciales y la posibilidad de maniobrar en ellas. Funcionarios judiciales monolingües con tendencia a no dar importancia a las dificultades que puede suponer para una persona o una comunidad entera tener que enfrentarse a procesos judiciales por medio de una lengua distinta a la materna. En la mayoría de las provincias no existen servicios de traductores bilingües oficiales dentro del sistema oficial, quienes excepcionalmente ofician de intérpretes encuentran serias dificultades en traducir los conceptos jurídicos occidentales a la mentalidad jurídica del pueblo en particular. Por esta razón son cuestionados y hasta amenazados con iniciar causas penales por falsedad en la traducción lingüística.
- Ineficiencia del sistema: impunidad de los delitos en que un indígena es víctima es bastante alta, distancia entre los servicios de justicia y lugar de residencia de los pueblos indígenas, falta de centros de información y atención al público, existencia de traductores a lenguas indígenas, existencia de juzgados especializados en materia indígena, etc.).

<sup>4</sup> Provincia del Neuquén en Argentina con Puyehue en Chile

- Barreras económicas: relativa insolvencia económica para enfrentar los gastos de un proceso judicial. Falta disponibilidad de servicios de asistencia jurídica gratuita para las comunidades y personas indígenas sin recursos. Se traduce en menos posibilidades de contratar equipos de abogados y peritos especializados en temas técnicos (dificultades probatorias por ej. en materia ambiental).
- Temor a represalias, acusaciones, criminalización, detenciones arbitrarias. Se utiliza el sistema policial y judicial para criminalizar la protesta dando impulso a causas penales hasta irrisorias contra dirigentes indígenas y miembros de instituciones acompañantes con la sola intención de efectuar un desgaste y presionar para que abandonen la lucha.
- En una amplia mayoría los jueces y funcionarios judiciales desconocen las normativas de derecho indígena. Los Jueces y fiscales no reciben capacitación en derechos de los pueblos indígenas ni conocen cómo viven. No hay defensores especializados y el estado no dedica recursos a financiar procesos de reclamos territoriales.
- Clima general de discriminación y malos tratos principalmente ante la policía que en muchos casos se niega a tomar denuncias, realiza largas dilaciones o esperas, toma exposiciones en vez de denuncias, etc.
- No hay debido proceso ni investigación en reparaciones adecuadas a los pueblos indígenas víctimas de crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura y desplazamientos forzados.

### **Recomendación**

AAJ insta al gobierno de Argentina a que cumpla con sus obligaciones internacionales relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas en virtud del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos.

---